

pp 101-129, En: Transiciones y alternativas al extractivismo en la región andina. Una mirada desde Bolivia, Ecuador y Perú. Alejandra Alayza y Eduardo Gudynas, eds. RedGE y CEPES, Lima, 2012.

La dimensión continental y global de las transiciones hacia las alternativas al desarrollo

Eduardo Gudynas
CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social)

Introducción

Las llamadas “transiciones hacia alternativas al desarrollo” son un conjunto de políticas, estrategias y acciones que abordan los impactos y problemas del desarrollo convencional actual, con el propósito de salir de esta condición adoptando alternativas más allá de ese desarrollo. Estas alternativas están enfocadas en erradicar la pobreza, asegurar una buena vida para las personas y la protección de la Naturaleza. Las transiciones vienen siendo discutidas en varios países y, en particular, abordan alternativas al extractivismo, en tanto este es uno de los mayores problemas que se enfrenta en la actualidad.

Las transiciones, por un lado, no se conforman con medidas instrumentales o reformistas; y, por otro lado, no postulan un cambio abrupto en un tiempo breve. En efecto, las transiciones son entendidas como un conjunto de cambios sucesivos que, en ciertos casos, aprovecha instrumentos actualmente disponibles y, en otros, apela a transformaciones radicales, bajo un compromiso democrático. Distintas visiones sobre las transiciones se presentan, por ejemplo, en los ensayos recopilados en Alayza y Gudynas (2011).

Uno de los aspectos claves de las transiciones son sus dimensiones internacionales. Estas son abordadas en la presente revisión, comenzando con un diagnóstico continental y global, para, luego, pasar a las medidas que la transición requiere en la integración regional dentro de América del Sur y frente a la globalización.

Necesarias alternativas a la integración y la globalización

El modelo de Transiciones hacia Alternativas al Desarrollo (TAD) apunta a reemplazar los estilos actuales que, de manera sucinta, se pueden caracterizar como un reduccionismo enfocado en el crecimiento económico, promoción de exportaciones y atracción de inversiones. Todo esto, descansa en una base material, en la que el bienestar se entiende esencialmente en el plano de los ingresos monetarios y el consumo, y por una apropiación intensa de la naturaleza. La expansión actual del extractivismo es un ejemplo de esta situación. En este contexto, las TAD buscan salir de ese desarrollo convencional, entendido como progreso; y se encaminan hacia distintas alternativas que pueden resumirse —muy esquemáticamente— en dos metas: erradicar la pobreza y evitar nuevas extinciones de biodiversidad. Se apunta a encontrar alternativas a la propia idea de desarrollo y, entre las opciones

que están siendo discutidas, en la actualidad, se encuentran las ideas sobre el “buen vivir” (Gudynas, 2011).

Las TAD, que se discuten actualmente, incluyen un conjunto diverso de políticas, estrategias, instrumentos y acciones en distintos planos, desde el económico al social. Se entiende que estas transiciones no pueden ser encaradas por países en forma aislada. Por el contrario, la integración regional con los países vecinos es un ingrediente indispensable, aunque ciertamente deberá ser muy distinta a la que se observa en la actualidad. Paralelamente, las TAD reconocen que la globalización es un factor determinante en los estilos de desarrollo actuales en América del Sur, como sucede, por ejemplo, con los altos precios de las materias primas o los flujos de capital. Estos y otros factores repiten condiciones que imponen la subordinación de la región a la globalización, y, por lo tanto, es necesaria una alternativa a estas condiciones que incluyan distintas opciones de autonomía y desvinculación. De esta manera, las TAD requieren su propia base conceptual, tanto sobre la integración regional como sobre la globalización.

Apuntes para un diagnóstico

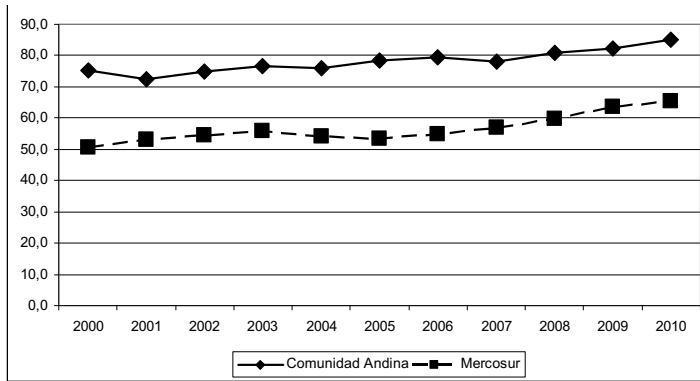
La situación actual debe ser revisada para determinar las opciones y limitaciones actuales. La presente sección ofrece algunos apuntes relacionados con esa materia.

Inserción comercial e integración continental

La inserción comercial muestra que los países andinos y el Mercosur siguen basando su comercio exterior en la exportación de materias primas (ver Figura 1). Esa incidencia es muy alta en el caso de la Comunidad Andina, ya que alcanza casi 80% del total de las exportaciones; y en el Mercosur, dado que es mayor al 50%. Este comercio está concentrado en unos pocos productos (por ejemplo, hidrocarburos, algunos minerales, o granos como la soya). Y esta tendencia no se ha revertido ni siquiera con el empuje integracionista de los últimos años, ni con la llegada de los gobiernos progresistas.

Figura 1

**Alta proporción de exportación de recursos naturales
Exportaciones de productos primarios en el total de las exportaciones**



Elaborado por el autor a partir de la base de datos de CEPAL.

El destino esencial de esas exportaciones son los mercados en otros continentes, con excepción de las exportaciones de gas boliviano hacia los países vecinos (especialmente Brasil). Por consiguiente, el nivel de comercio intrarregional es bajo en varios países y, si bien hay fluctuaciones, esta condición se ha repetido en los últimos años (ver Tabla 1). Esto indica que la esperada desviación de comercio hacia el interior de la región no se ha dado y, tampoco, se ha producido un cambio en la composición de esos intercambios. El estilo extrovertido, que descansa –en buena medida– en el extractivismo, persiste.

El comercio dentro de los grandes bloques de integración solo ha mostrado aumentos sostenidos en Centroamérica. En cambio, en la Comunidad Andina, la participación del comercio entre los miembros es muy baja (no supera el 10% de las exportaciones totales). Más aún, es menor a la proporción observada en el Mercosur y el Mercado Común Centroamericano (CEPAL, 2011). De esta manera, se concluye que los bloques de integración sudamericanos no han logrado cambiar el patrón de comercio clásico que depende de las materias primas y de las demandas desde otros continentes.

El estado de los acuerdos e institucionalidades regionales también es problemático (ver Altmann & Rojas Aravena, 2008; Malamud, 2004, 2009; y Caetano, 2009). La

Comunidad Andina padece de un estancamiento que lleva varios años. Esto incluye la salida de Venezuela, uno de sus miembros; de diferentes políticas comerciales, que en algunos casos se oponen entre sí –como la aceptación o no del TLC con Estados Unidos–; y de bajos niveles de coordinación en otros temas. El Mercosur posee un nivel de acatamiento institucional un poco mayor, ya que negocian en conjunto sus acuerdos comerciales. Sin embargo, no ha logrado consolidar ni el libre comercio entre los socios ni convertirse en una zona aduanera: persisten muchas excepciones y proliferan medidas unilaterales, en especial desde Argentina y Brasil; asimismo, el ingreso de Venezuela todavía no se ha concretado.

Tabla 1
Comercio dentro de América Latina
Porcentaje de exportaciones intrarregionales sobre el total

Países	1990	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>Bolivia</i>	44.8	44.5	67.4	65.6	62.4	65.0	59.6	60.6
<i>Chile</i>	12.6	21.9	17.2	16.8	16.7	19.4	18.1	17.1
<i>Colombia</i>	16.1	28.8	33.5	31.1	36.0	35.8	30.7	26.6
<i>Ecuador</i>	17,7	31.5	30.8	27.4	33.3	35,6	42.2	39.4
<i>Perú</i>	14.6	18.1	20.9	20.6	21.0	21.0	15.6	16.9
<i>Venezuela</i>	8.9	19.5	13.4	13.5	—	—	—	—

Basado en datos de CEPAL; países seleccionados.

Tanto dentro de la Comunidad Andina como en el Mercosur se ha logrado avances sustanciales, especialmente en áreas no comerciales, como la flexibilización del tránsito de personas o coordinaciones en áreas, como educación o salud. Sin embargo, persisten diversas tensiones y contradicciones, como las disputas entre Colombia y Ecuador, o entre Argentina y Uruguay.

Parecería que, los dos bloques han aceptado –hasta cierto punto– estos problemas y se resignan a este estancamiento. Las propuestas que se buscan apuestan a vinculaciones entre gobiernos de mayor afinidad ideológica, tal como sucede con el ALBA (Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América), promovida por Venezuela (ver Katz, 2006). No obstante, esta iniciativa se asemeja más a una red de acuerdos de cooperación y financiamiento que a un proceso de integración. Entre sus aspectos más novedosos, se encuentra su convenio de “comercio entre

los pueblos” o la conformación de “empresas grannacionales”; pero todo esto depende mucho del empuje y la financiación venezolana.

Otra de las propuestas es saltarse los bloques subregionales e intentar una integración continental. Este es el caso de UNASUR (Unión de Naciones Sudamericanas), que es una reformulación del proyecto de una “comunidad” sudamericana. Por ahora, UNASUR se mantiene esencialmente como un espacio de discusión y coordinación política. En este frente, se han logrado avances sustanciales: intervenciones en casos de inestabilidad en algunos países, como el notable apoyo a Evo Morales en Bolivia; pero no se plantea una coordinación comercial o productiva. Una situación similar podría describirse para la reciente Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC).

Estos y otros datos indican que los bloques regionales no han cambiado el patrón comercial del continente: los países siguen compitiendo en exportar conjuntos similares de materias primas hacia destinos extracontinentales. Posiblemente, la única excepción de un intento de cambiar el patrón comercial ocurrió en Venezuela con su propuesta de compartir y coordinar la explotación y uso de hidrocarburos pesados. Sin embargo, aun bajo los actuales gobiernos progresistas, los intentos de integración no logran alcanzar medidas de coordinación económica y comercial sustantivas. Incluso, se observan posturas difíciles de explicar, como la de Ecuador que apuesta, de un lado, por el ALBA y, de otro, puede comenzar a negociar un TLC con la UE (Unión Europea).

Un breve examen de otros acuerdos regionales sectoriales muestra que todos responden a estas mismas tendencias. Por ejemplo, uno de los más exitosos, el IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana) sirve, primero, para generar cadenas de comercio global antes que una interconexión endógena sudamericana. Por lo tanto, es funcional a las necesidades de transporte y comunicación de sectores como el extractivismo. En cambio, en el Mercosur, se aprobó un Fondo de Convergencia Estructural (FOCEN), que —si bien todavía es pequeño y limitado— posee las potencialidades de asistencia financiera enfocada en las naciones más pequeñas. A su vez, esto permite reducir asimetrías.

Existen también acuerdos subregionales que, pese a ubicarse actualmente en un plano secundario, tienen potencialidades importantes. Entre ellos, destaca el Tratado de Cooperación Amazónica y su organización (OTCA), ya que es uno de los pocos convenios que incluye un enfoque en protección de la biodiversidad y manejo conjunto de recursos naturales a nivel de cuenca.

En conclusión, se puede afirmar que la situación actual de la integración sudamericana no logra ser un aporte decisivo para otro tipo de regionalismo o para permitir una inserción internacional diferente. Temas sustantivos como la reducción de las asimetrías y la convergencia han desaparecido de la agenda. Además, la retórica de la integración se mantiene y lo más positivo es que tiene un fuerte apoyo ciudadano. Sin embargo, las acciones concretas de los Gobiernos en los distintos bloques no generan condiciones suficientes para cambiar los perfiles comerciales, basados en la exportación de materias primas e importaciones de manufacturas desde otros continentes. Por tanto, las transiciones requieren cambios profundos tanto en la estructura como en los mecanismos, pero, inclusive, en las bases conceptuales de la integración actual.

El papel de Brasil

Brasil podría jugar un papel fundamental en la situación actual de la integración latinoamericana y podría, a su vez, promover cambios decisivos hacia las alternativas si se lo propusiera. No obstante, su desempeño actual muestra que no está caminando en este sentido. Durante el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, ocurrieron diversos cambios que deben ser considerados para abordar las transiciones. En el caso del presente análisis, debe subrayarse que se acentuó el papel del extractivismo, especialmente en minería y monocultivos; aumentó la proporción de materias primas en sus exportaciones; y hubo una desindustrialización.

A nivel global, Brasil intenta presentarse como el líder sudamericano y, para que esto sea posible, debe contar con algún tipo de legitimidad que le otorguen los países vecinos. Ello explica que se intente cultivar una actitud de amistad, sin imposiciones notorias, que algunos califican de “hegemonía consensuada”. Al margen de esas prácticas, de todas maneras, se observa una expansión empresarial brasileña en los países vecinos (especialmente en petróleo, gas, minería, fertilizantes, granos, frigoríficos y construcción), además del mantenimiento de las asimetrías comerciales, y trabas a los intentos de fortalecer normas regionales.

Brasil siempre se ha opuesto a la existencia de normas supranacionales, lo que explica que el Mercosur sea un raro caso de intentar un “mercado común” a partir de acuerdos intergubernamentales. Esa postura, también, manifiesta que Brasil desactivará los pasos hacia una “comunidad” de naciones, para mantenerse en el plano de los foros políticos de discusión. En otros campos, como ocurre con las negociaciones de cambio climático, Brasil no coordina ni con sus socios del Mercosur ni en el seno del “grupo latinoamericano”. Estas son posturas que no atacan las

asimetrías de este país frente a sus socios más pequeños; se repiten, así, relaciones comerciales asimétricas aunque dentro del continente, donde los países vecinos le deberían proveer de materias primas y Brasil les vendería sus manufacturas. Un ejemplo reciente de estas posiciones es la intención de construir represas hidroeléctricas en la Amazonía de Perú.

Todo esto hace que prevalezca la bilateralidad antes que los acuerdos en conjunto. Más aún, en todo momento, está presente una conciencia excluyente del propio liderazgo. Al respecto, Pinheiro Guimarães (2005), un destacado diplomático, deja en claro su autoconciencia de que, en ese papel, Brasil no tiene rivales. Paralelamente, Brasil se considera ahora más un global player antes que el motor de la integración sudamericana; es decir, atiende más escenarios como el G20 que los acuerdos sudamericanos.

Se registra una notable expansión de las corporaciones brasileñas en los países vecinos. Entre las diez empresas más grandes de América Latina, seis son brasileñas: (cinco de ellas en minería y petróleo, y una en construcción –América Económica, 2011–). Estos son los casos de empresas como Petrobrás, la minera Vale o la constructora Odebrecht. En los últimos años, estas grandes compañías se han transnacionalizado gracias a masivas asistencias financieras gubernamentales, en particular desde el Banco Nacional de Desarrollo Económico Social (BNDES). Además, la asistencia otorgada a países vecinos está condicionada a contratar empresas o servicios brasileños.

En los últimos años, han surgido diversas tensiones entre Brasil y varios de sus vecinos. Destacan los casos de Paraguay, por el pago de energía eléctrica de la represa de Itaipú; con Bolivia, por la venta de gas natural; con Perú, por proyectos de construcción de represas en la Amazonía; y, con Ecuador, por la construcción de una represa.

Por detrás de este tipo de problemas se encuentra el hecho de que las estrategias de desarrollo de las administraciones Lula da Silva y Dilma Vana Rousseff siguen, en buena medida, descansando en sus materias primas. Más allá de intervenciones sectoriales, repiten el enfoque en la estabilidad y ortodoxia macroeconómica (Erber, 2011).

Instituciones financieras regionales

Es necesario comentar brevemente el nuevo contexto de la financiación al desarrollo. Actualmente, los gobiernos sudamericanos dependen cada vez menos

del aporte de las grandes instituciones financieras globales, como el FMI (Fondo Monetario Internacional) o el Banco Mundial. Esto se debe a que los flujos de capital siguen llegando a la región y, paralelamente, ahora se cuenta con las llamadas Instituciones Financieras Regionales (IFR). Estas incluyen no solo a entidades regionales, como la Corporación Andina de Fomento (CAF) o el Fondo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), sino también a algunos bancos nacionales que actúan en varios países, como el BANDES, de Venezuela; o BNDES, de Brasil; y el Banco del Sur, que se sumará a estos en breve.

El papel de estas IFR es muy relevante. Su existencia y abultadas carteras dejan en claro que estos gobiernos poseen recursos suficientes como para ensayar otros tipos de desarrollo (Gudynas, 2008). El caso más claro es el del BNDES, ya que su cartera de préstamos es, por lo menos, tres veces mayor que la del Banco Mundial (con una cartera de US\$ 17,200 millones para obras de infraestructura en América Latina –Lissardy, 2011–). Las IFR son, también, instituciones que, en buena medida, están en manos de los propios gobiernos latinoamericanos y, por ende, no se ven limitados a condiciones impuestas por los países desarrollados. A pesar de esta enorme ventaja, el resultado de esta mayor independencia ha sido decepcionante en los flancos sociales y ambientales. Y es que, en las IFR, los requisitos de desempeño, los canales de acceso a la información y el monitoreo de los proyectos son, por lo general, más débiles o limitados en comparación con instituciones globales, como el Banco Mundial.

En conclusión, será indispensable reformar estos esquemas de financiamiento para conseguir las transiciones; pero, a su vez, estas nuevas instituciones pueden ser aprovechadas, ya que, siguiendo otro tipo de políticas, podrían desempeñar un papel muy relevante en consolidar alternativas postextractivistas.

La contracara de esta situación son los intentos de crear una arquitectura financiera alternativa, y, en ella, construir un banco regional de desarrollo orientado a otro tipo de proyectos, como se planteó originalmente para el Banco del Sur; o a mecanismos de comercio y financiamiento propios, que se ven expresados en la idea del SUCRE para el comercio dentro del continente (Paéz, 2010).

Condiciones globales cambiantes

Las opciones de transiciones deben también lidiar con un cambiante escenario global. Entre las principales tendencias, actualmente, se observa la caída en la influencia de varios países industrializados, especialmente la Unión Europea

y Estados Unidos. Así, mientras el bloque del euro sigue sumido en una crisis económica y financiera, Estados Unidos ha logrado algunos niveles de recuperación económica, pero de todos modos parece claro que se reducen sus capacidades de liderazgo global.

En este contexto, se observa un redireccionamiento de los flujos de capital hacia ciertos commodities, la revalorización de los minerales, hidrocarburos y alimentos, y fenómenos como la compra de tierras (ver FAO, 2011; y World Bank, 2012). Estos son factores de enorme peso para explicar, por ejemplo, la expansión actual del extractivismo, y las TAD deben ofrecer opciones para trascenderlos.

Distintos países del sur, aparecen con mejores performances económicas, rotulados como “economías emergentes”. Entre ellos, destaca China, no solo por su crecimiento económico, sino por su alta demanda de materias primas, muchas de las cuales obtiene en América Latina (Rosales & Kuwayam, 2012). Esto deriva en una mayor tasa de crecimiento del comercio sur-sur, y, de ahí, el renovado interés sudamericano por las naciones asiáticas.

De forma muy esquemática, estas tendencias han sido descritas a nivel global como “el ocaso de EE.UU. y el surgimiento de China”. Pero esta descripción es insuficiente en el marco de las transiciones. En efecto, si bien China expresa sin duda un cambio en la geopolítica global, no supone un cambio en las cualidades de las relaciones comerciales, en el tipo de comercio o en las ideas de desarrollo. Pekín apuesta también por el crecimiento económico, y espera convertir a varias regiones del sur, entre ellas América Latina, en sus proveedores de materias primas y en compradores de sus manufacturas. La redirección del comercio global hacia el sur no significa aliviar la presión extractivista, ni genera mejores condiciones para las alternativas. A su vez, como China descansa en un gobierno centralizado y autoritario, su mayor protagonismo en las instituciones de gobernanza global no resulta en democratizarlas, en aumentar su transparencia o en abrir canales a la sociedad civil. Esto explica el debilitamiento y los nuevos límites que enfrenta, por ejemplo, una agenda global ciudadana en derechos humanos o calidad ambiental, lo que hace más difícil las alternativas en ese plano.

Las ideas sobre el regionalismo y la globalización

Si se consideran las ideas prevalecientes en América Latina, se observa que más allá de las retóricas y las diversidades (ver Malamud, 2004; o las entradas sobre “regionalismo”, en Gudynas & Buonomo, 2007), persiste el apego a ciertas formas

de liberalización comercial bajo una fuerte influencia del “regionalismo abierto” promovido por CEPAL (1994). Los países sudamericanos siguen apostando a la Organización Mundial del Comercio (OMC) (incluso han tratado de fortalecerla) y no han intentado reforzar otros esquemas (como la UNCTAD). Se cae, pues, en diferentes tipos de regionalismo abierto.

También, debe apuntarse que, a pesar de la crisis global, en la región, el debate en cuestión no es tan intenso como sí lo es en el hemisferio norte. Así, actualmente, los gobiernos sudamericanos, varios movimientos sociales (en especial, algunos sectores sindicales), y muchos espacios académicos—incluso, algunos relacionados con los partidos de izquierda—no juegan papeles significativos en la búsqueda de alternativas a la globalización.

La bonanza económica parece haber aplacado muchas inquietudes y se acepta cierto apego a la globalización. Como nuestros países siguen siendo proveedores de materias primas, necesitan lograr esa liberalización para mantener y ampliar sus exportaciones. Esto explica, por ejemplo, el ataque a los subsidios agrícolas de los países del Cono Sur, y su reclamo de la liberalización comercial en la OMC.

Existen algunas posturas heterodoxas en algunos temas, que van desde la retórica antimperialista de la administración Hugo Chávez, a los intentos de controlar importaciones y flujos de capital en la Argentina de Cristina Fernández. Sin embargo, en ningún caso, se pone en discusión la estrategia de desarrollo. Se repiten, así, contradicciones sustantivas, como en el caso argentino, en el que el gobierno kirchnerista dice promover un desarrollo “nacional y popular”, pero para ello apoya, por ejemplo, una nueva fase de expansión minera.

En el caso de las TAD, puede concluirse que se debe mejorar el análisis crítico sobre el regionalismo abierto, mientras que este siga presente; asimismo, es necesario ofrecer una alternativa de un regionalismo distinto.

Ahora bien, en el campo de las ideas sobre la globalización, un tema a considerar es el impacto que tiene la creciente evidencia de una crisis ambiental a escala planetaria, en especial, por el cambio climático. En este campo, las posiciones también son diversas en América del Sur. Por ejemplo, Bolivia intentó implantar una mirada distinta en las negociaciones sobre el cambio climático, pero finalmente quedó aislada; y Brasil mantiene una postura individual, sin coordinar dentro del continente. De todos modos, las tendencias que prevalecen son las de evitar medidas sustantivas que tengan un efecto económico y, se evade, así, la

necesidad de medidas sustantivas en mitigación por cambios en el uso del suelo, ya sea por la agricultura o deforestación. Otras tendencias predominantes se refieren al reclamo por compensaciones y transferencias económicas, mientras se centran en acciones de adaptación (Honty, 2011). En conclusión, la región no es un actor de liderazgo hacia otra gobernabilidad ambiental planetaria.

Dimensión internacional de las transiciones

Las secciones anteriores evidencian la necesidad de una transición hacia otro desarrollo que no descansa en un extractivismo exportador. También, queda claro que las circunstancias continentales y globales expresan restricciones y limitaciones para un cambio; por lo tanto, las transiciones deben operar también en esas dimensiones. En la presente sección, se exploran los componentes destacados en el plano internacional para las TAD y, en particular, aquellos que permitan una rápida salida postextractivista.

El necesario componente internacional: un marco conceptual

Las fases iniciales de las transiciones proponen cambios en varios frentes, muchas de las cuales no solo incluyen una dimensión internacional, sino que esta es indispensable para su concreción. Es posible postular al menos tres líneas conceptuales en este sentido:

- 1) Los cambios nacionales deben ser coordinados entre conjuntos de países para hacerlos posibles y asegurar su permanencia. La salida de un patrón productivo extractivista y extrovertido requiere de diversas estrategias y medidas nacionales, que van desde altas y eficientes exigencias sociales, ambientales y territoriales, a una reforma tributaria. Para que el país que aplique esas medidas no quede aislado, sufra de asimetrías o enfrente dumping social y ambiental de las naciones vecinas, es indispensable que grupos de países vecinos tomen el mismo rumbo. A su vez, las medidas de transiciones se sostendrán en el tiempo si se coordinan y armonizan continentalmente.
- 2) Recuperación de la autonomía frente a la globalización. Como la globalización convencional contiene muchas de las estructuras y procesos que impone o condiciona el desarrollo, es necesario recuperar las capacidades para desacoplarse de esa subordinación. Factores como los precios de las materias primas, las demandas globales, la institucionalidad multilateral o

las corporaciones transnacionales son parte de esa globalización. Esto hace que un objetivo esencial sea alcanzar la autonomía frente a la globalización, ser capaces de lograr desvinculaciones en aquellas áreas en las que se considere necesario, y en aquellas cuestiones en las que se mantengan articulaciones globales, para que estas sean de otra cualidad y sirvan a otro tipo de desarrollo. Este proceso se presenta aquí como una “desvinculación selectiva de la globalización”.

- 3) Transitar a un “regionalismo autónomo”, bajo una reorientación económica, productiva y comercial a escala continental. Como las TAD incluyen una reducción sustancial del extractivismo, es necesario un reordenamiento productivo y económico, en el que otros sectores adquieran mayor relevancia, como el agropecuario y el industrial. Pero estos sectores se deberían reordenar bajo una escala regional para potenciarlos, lo que hace necesario un nuevo tipo de integración. Este nuevo regionalismo se basa en las aptitudes ecológicas y productivas de las distintas biorregiones del continente: su complementación, la estructuración de cadenas productivas con eslabones compartidos entre los países, políticas sectoriales supranacionales, entre otras medidas. En tanto, es un nuevo regionalismo que, además, debe apuntar a desacoplarse de la globalización. Se presenta así como un “regionalismo autónomo”.

A partir de este marco conceptual, en las secciones siguientes, se describen algunos de los componentes destacados y necesarios de un nuevo regionalismo sudamericano que permitan las transiciones de salida al extractivismo. A modo de complemento, en la Tabla 2, se presenta una selección de medidas específicas para lograr estos cambios.

Tabla 2 Ejemplos de medidas concretas de un regionalismo autónomo para el postextractivismo	
	Exigencias ambientales y sociales frente a emprendimientos extractivos, armonizadas y coordinadas entre los países.
	Mecanismos de corrección ecológica y social de los precios de las materias primas, coordinados y complementarios entre los países.
	Mecanismos compartidos y equivalentes para la evaluación de la inversión extranjera enfocada en recursos naturales.

Acuerdos regionales de acceso a la información y transparencia de la inversión extranjera sobre sectores extractivos.
Procedimientos de planificación y ordenamiento territorial, consultado y participativo, con estándares regionales mínimos.
Acuerdos específicos sobre recursos compartidos, cuencas comunes y zonas de frontera.
Reconocimiento de biorregiones delimitadas por atributos ecológicos, productivos y culturales.
Coordinación productiva regional basada en una complementación de las aptitudes ecológicas y opciones productivas de cada biorregión.
Reformas tributarias que eleven las regalías sobre el extractivismo en forma coordinada y acompañada en los países de la región.
Mecanismos similares para implantar impuestos a las sobreganancias.
Priorizar y reorientar la apropiación de recursos no-renovables a las necesidades y demandas del continente.
Política ambiental regional, que incluya sistemas e instrumentos de protección de la biodiversidad a escala continental.
Política agropecuaria y alimentaria regional, que orienten la producción agropecuaria con prioridad hacia las necesidades de alimentación continentales.
Política energética regional, que oriente los energéticos a las necesidades continentales antes que a la exportación global; acuerdos sobre uso eficiente de la energía y reconversión hacia fuentes alternativas limpias.
Cadenas de valor/producción con eslabones compartidos entre los países.
Redes de comunicación e interconexión reorientadas hacia las necesidades de comunicación y transporte dentro del continente, y no hacia la globalización.
Instituciones financieras regionales, como CAF, FonPlata, y otras, que incorporen altos estándares sociales y ambientales, mecanismos de acceso a la información y participación ciudadana, y controles transparentes de sus financiamientos y proyectos.
Enfocar al Banco del Sur en financiar emprendimientos, que no son abordados por la banca privada o las IFR tradicionales, para que se especialice en proyectos a largo plazo, con alto contenido social ambiental.

Apuntalamiento de medidas nacionales en el marco regional

Comencemos por recordar que las TAD incluyen, entre sus medidas de emergencia y urgencia, una aplicación rigurosa de las exigencias sociales y ambientales de los emprendimientos de desarrollo, una corrección ecológica y social de los precios, y reformas tributarias sobre los recursos naturales. Medidas de este tipo

son postuladas para la transición del actual “extractivismo depredador” hacia un “extractivismo sensato” (Gudynas, 2011).

Sin embargo, si estas medidas son aplicadas por un país en forma unilateral, sus posibilidades de éxito son bajas, puesto que fácilmente será aislado de los flujos comerciales y financieros, los resultados sociales y ambientales netos serán dudosos, y, tal vez, no sea posible sostenerlos en el tiempo. Además, bajo la unilateralidad, los proyectos productivos se mudarán a otros países, se enfrentarán dificultades serias en acceder al capital, etc. Tampoco, puede descartarse que otros países vecinos, que no han adoptado medidas transicionales, aprovechen las circunstancias para atraer más inversiones o aumentar sus exportaciones bajo prácticas convencionales, lo que acentuaría un dumping social y ambiental.

Por lo tanto, es necesario que las medidas transicionales, como aquellas enfocadas en elevar las exigencias socioambientales o que internalicen las externalidades en los precios, sean llevadas adelante por conjuntos de países. Esto es indispensable para evitar competencias desleales entre los países o formas de dumping, y deja sin alternativas a las corporaciones transnacionales o a los compradores globales.

El problema es que un abordaje de este tipo no es posible bajo el actual marco regional. Como se indicó previamente, ni la Comunidad Andina ni el Mercosur discuten medidas compartidas para elevar sus exigencias socioambientales, armonizar las existentes, o mejorar sus controles o monitoreos. Este tipo de limitaciones obliga que sea necesario cambiar los contenidos y los modos de las negociaciones regionales. Además, esta situación exige que, en la reforma de los bloques regionales, se deba jerarquizar la identificación de normas sociales y ambientales regionales, armonizarlas entre los países y sus ecorregiones, y establecer procedimientos equivalentes de monitoreo y control. Medidas urgentes son, por ejemplo, lograr estándares sociales y ambientales mínimos regionales para la explotación minera o petrolera.

Una consideración especial merecen las zonas de frontera y las cuencas compartidas entre países. Muchos emprendimientos se realizan en esas áreas, con efectos que van más allá de sus fronteras. Existen, por ejemplo, desde proyectos mineros compartidos, como Pascua Lama para Argentina y Chile, hasta los impactos transfronterizos de las represas brasileñas sobre el Río Madeira, en suelo boliviano. Aquí, los avances también son limitados en lo que refiere a la Comunidad Andina y el Mercosur. Pero, por otro lado, se cuenta con un acuerdo regional para la cuenca amazónica (OTCA) que ofrece enormes oportunidades. Por ende, la nueva

integración para las transiciones debe ser capaz de lograr acuerdos específicos para esas zonas fronterizas; en este sentido, esquemas como la OTCA deben ser fortalecidos y ampliados para otras zonas, y es necesario abordar una gestión integrada, y coordinada de recursos y opciones productivas que no esté limitada por las divisiones políticas.

Es oportuno ofrecer algunos comentarios sobre las alternativas para manejar los flujos de capital en una dimensión regional. En la actualidad, buena parte de la inversión extranjera directa está orientada a comprar activos ya existentes, o a inversiones en recursos naturales. Esto incluye aquellas enfocadas en el extractivismo (un 57% del total de inversiones se destinó a recursos naturales entre 2006 y 2011, en América del Sur, sin considerar a Brasil) (CEPAL, 2012). Tampoco debe olvidarse que una parte de todo ese volumen sigue asociada a fines especulativos. En muchos casos, se usan las inversiones como excusas o chantajes políticos para buscar la flexibilización o reducción de las exigencias sociales y ambientales. A su vez, la liberación de flujos también es necesaria para que las empresas que participan en esos emprendimientos puedan remitir a sus casas matrices las ganancias de la región. Frente a estas y otras situaciones, las medidas transicionales buscan controlar esos flujos de capital, salvaguardar exigencias socioambientales adecuadas y rigurosas, protegerse de fondos especulativos, etc. Su propósito es orientar los capitales legítimos hacia destinos distintos, que vayan más allá del extractivismo y que sirvan al financiamiento de otras opciones productivas. Una vez más, en este frente, también es necesaria la coordinación regional para evitar que un país quede aislado o sin acceso a fondos.

En este caso, se cuentan con las IFR. Esto muestra que existen importantes volúmenes de capitales dentro de la región, y que, por tanto, es posible orientarlos a otros fines. Sin embargo, es evidente que deben cambiarse sus prácticas y orientaciones, incluyendo el financiamiento de otro tipo de proyectos con procedimientos transparentes y participativos y, en este marco, el uso de altos estándares sociales y ambientales. En especial, debería apoyarse un Banco del Sur que financie proyectos de reconversión productiva, y que sea una fuente de financiamiento social y ambiental, de muy larga duración, sin estar atado a la rentabilidad económica convencional. En cuanto al comercio y flujos de capital, se pueden aprovechar iniciativas, como las del SUCRE, para profundizarlas y ampliarlas a otros países. Sean estos u otros medios, es necesario modificar tanto las instituciones financieras como sus prácticas y objetivos.

La propuesta del regionalismo autónomo

Como se adelantó arriba, en América del Sur, siguen prevaleciendo diferentes versiones o variantes de un “regionalismo abierto”, que, en sus postulados iniciales de CEPAL, es concebido como una conciliación del comercio preferencial regional con la liberalización comercial global. La integración es un proceso esencialmente comercial y ofrece mediaciones para adentrarse en la globalización (CEPAL, 2004). En sus primeras formulaciones, el regionalismo abierto cepalino ofrecía como modelo al NAFTA, aunque luego incluyó esquemas de otro tipo, como el Mercosur, lo que permitió centrar más la atención en los aspectos políticos y el papel estatal. Pero la racionalidad de esa integración es volverla funcional a la globalización convencional, y, en este marco, los acuerdos entre países vecinos son una preparación o fortalecimiento para luego avanzar hacia los mercados globales.

Pese a que el regionalismo sudamericano es heterogéneo, exhibe, de todos modos, muchos atributos de este regionalismo abierto, que van desde las posiciones unilaterales y aperturistas de Chile a los intentos de institucionalidad y coordinación del Mercosur (ver análisis de estos casos en Caetano, 2009; Malamud, 2009; Altmann & Rojas Aravena, 2008, y sobre los términos referidos el diccionario de Gudynas & Buonomo, 2007). Venezuela expresa una posición distinta con su integración “bolivariana”, con mayores niveles de complementación y coordinación (como es el caso de su ambicioso proyecto de empresas “grannacionales”), pero bajas capacidades de formalización. Las dos miradas no son necesariamente excluyentes: Ecuador es miembro del Alba y discute un TLC con la UE.

Las TAD no son posibles bajo esquemas del regionalismo abierto (incluyendo los TLC) por varios motivos. Entre ellos, destaca que es una propuesta esencialmente comercial, que no otorga la relevancia necesaria a los componentes sociales, ambientales y políticos, y estos son indispensables en las transiciones a otros desarrollos. Tampoco, ofrece alternativas para lidiar con la globalización, sino que apunta a profundizar los vínculos con ella, mientras que las TAD buscan desacoplarse de la globalización. Tampoco, asegura marcos institucionales supranacionales que puedan servir para coordinar otro tipo de estrategias productivas, y estas son indispensables para salir de la dependencia extractivista (Gudynas, 2005).

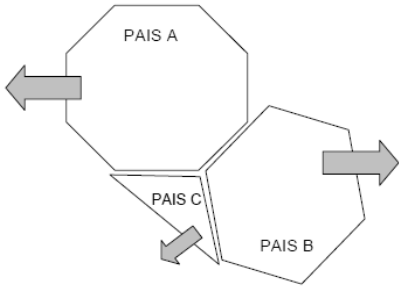
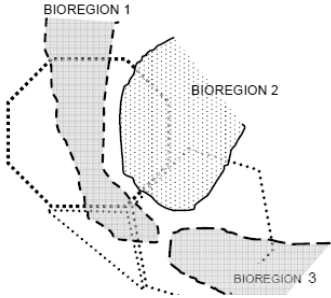
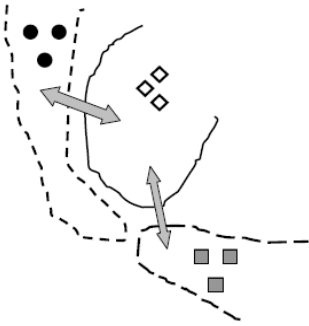
Bajo las TAD, la alternativa es postular un “regionalismo autónomo”, un concepto elaborado a partir de los primeros análisis sobre alternativas enfocadas en el desarrollo sostenible del Cono Sur (Gudynas, 2002). En este caso, el propósito

es acentuar la integración regional, brindando las condiciones para otro tipo de desarrollo, mientras se recupera la autonomía frente a la globalización. Se apunta a romper con la dependencia global y ofrecer alternativas de desarrollo a medida que se avanza en un sendero postextractivista. La reducción en la exportación de materias primas requiere reconversiones productivas. Entre ellas, son fundamentales aquellas que se organizan como cadenas productivas compartidas entre distintas regiones y países.

En esta estrategia regional, la apropiación de materias primas tendría como principal destino las necesidades y demandas continentales, y, como estas son mucho más modestas, se reforzará la reducción extractivista. Se reduce la tasa de extracción de recursos y, allí donde se mantienen, podrán ser aprovechados por más tiempo a nivel regional. A su vez, esos recursos deben estar directamente dirigidos a cadenas productivas, sean agroalimentarias o industriales, tanto nacionales como regionales. De esta manera, se rompe con el actual vínculo tortuoso de exportar a otros continentes enormes volúmenes de recursos naturales para comprarles sus manufacturas.

Como se ha indicado ya en secciones anteriores, está claro que estos son cambios profundos en los procesos productivos. Además de los elementos mencionados arriba, como las exigencias sociales y ambientales, el manejo de recursos compartidos, o la corrección de precios, este nuevo regionalismo parte de la base ecológica continental. En efecto, se identificarán biorregiones, entendidas como regiones delimitadas por atributos ecológicos, sociales y productivos, como los Páramos, el Altiplano, Chaco o Pampas. Cada una de estas biorregiones posee aptitudes ecológicas y productivas propias, que expresan los mejores balances entre los usos productivos, los beneficios sociales y laborales, y los impactos ambientales. Asimismo, se establecerán complementariedades productivas entre las distintas biorregiones a partir de estas aptitudes. No tiene sentido forzar, por ejemplo, cultivos tropicales en las regiones australes, o deforestar la Amazonía para implantar la ganadería extensiva. Al contrario, se deben identificar las mejores opciones y complementar esos usos productivos entre las diferentes regiones (ver Figura 2).

Figura 2
Ejemplos de abordajes biorregionales

	<p>A. Situación actual de tres países cuyas exportaciones tienen sobre todo destinos en otros continentes.</p>
	<p>B. Identificación de biorregiones compartidas entre los países.</p>
	<p>C. Cada biorregión posee aptitudes ecológicas y productivas propias, con sus propios productos (ejemplificados con rombos, círculos y cuadrados), los que se pueden complementar entre sí, generando flujos de comercio regional que reemplazan la subordinación global.</p>

Esto hace que, bajo las transiciones de un regionalismo autónomo, no se reclame suspender el comercio internacional, sino que este sea estructurado y regulado de otra manera. La relevancia del comercio global se reduciría y aumentaría, así, la proporción de comercio intrarregional. A su vez, este cambiaría de composición bajo las TAD y se reduciría drásticamente la proporción de recursos no renovables,

mientras que la de alimentos y manufacturas aumentaría. Indudablemente, ese comercio, a su vez, estaría limitado por sus costes energéticos y ambientales, que seguramente involucrarán distancias menores.

Bajo el regionalismo autónomo, los sectores productivos se organizan como eslabones o componentes compartidos entre los países. Su propósito es no repetir las asimetrías comerciales entre proveedores de materias primas y vendedores de manufacturas o bienes de capital. Por tanto, bajo estas transiciones, la industrialización sería una estrategia compartida entre varias naciones. En términos más generales, se organizarán cadenas de valor regionales. Es evidente que esto requiere un cambio de actitud no solo en los gobiernos proveedores de commodities, sino también en cómo Brasil interpreta el papel de su industria nacional, que tendría que ser abierta a la articulación con industrias de las naciones vecinas.

Como puede verse, esta propuesta tiene algunas resonancias con las ideas de autosuficiencia a escala nacional, o de “vivir con lo nuestro” (para utilizar palabras del argentino Aldo Ferrer, 2002), aunque en este caso han sido aplicadas a grupos de países. Este nuevo regionalismo encierra varias consecuencias en distintos sectores. Las vinculaciones comerciales con otros continentes se reducen drásticamente a medida que aumentan las complementaciones dentro de la región. Por ejemplo, deberán existir estrategias regionales en agroalimentos, y la soberanía alimentaria pasa a ser una meta regional antes que nacional. Los recursos energéticos se utilizarán regionalmente antes que globalmente, y, en este marco, se torna indispensable contar con una política energética supranacional. Siguiendo este mismo razonamiento, es posible derivar propuestas similares para otros sectores.

Todo esto deja en claro que el regionalismo autónomo requiere necesariamente de acuerdos supranacionales. En el marco de las TAD, se considera que las prioridades inmediatas son políticas regionales en los siguientes sectores: ambiental, incluidos los recursos y cuencas compartidas; agropecuario, en especial para enfocar la producción agroalimentaria para resolver el componente nutricional de la pobreza; y energético e industrial. Las políticas, en estos y otros temas, desembocarán en una estrategia comercial consensuada entre los países de la región.

Desvinculación selectiva de la globalización

Las TAD requieren considerar, con cierto detalle, el papel de la globalización en mantener el extractivismo actual en particular, y los estilos de desarrollo

insostenibles en general. Como se adelantó previamente, esta opera de varias formas. Entre estas, actualmente, destaca la presión que ejerce el precio de las materias primas, la demanda mundial y el redireccionamiento de los flujos de inversión. Así, si suben los precios, ya sea del hierro o la soja, aumenta la búsqueda de ese mineral y su extracción. Más aún, otros sectores, como el suministro de energía o las redes de transporte, se vuelven funcionales a estas condiciones. El ejemplo más claro es el IIRSA.

Esta globalización también opera por medio de flujos de capital, mercancías e información, que en buena medida siguen controlados por grandes corporaciones. Incluso, los países con gobiernos progresistas, que han nacionalizado recursos o estatizado empresas, vuelven a caer en acuerdos de diversa índole con las empresas transnacionales. La novedad es que estas en la actualidad no solo están representadas por las clásicas corporaciones del hemisferio norte, sino que ahora juegan papeles similares algunas empresas estatales chinas y las llamadas translatinas, como la minera Vale y la petrolera Petrobrás.

En paralelo a ellas, existe una gobernanza global que mantiene y reproduce estas condiciones. Esta incluye desde instituciones multilaterales como la Organización Mundial de Comercio, hasta el papel que desempeñan organismos como las bolsas de granos en Chicago o de metales en Toronto.

Sea por medio de agentes privados, como las empresas o los inversores, o a través de los gobiernos actuando en la gobernanza internacional, existen mecanismos que orientan, condicionan y manejan aquellos flujos de capital, mercancías e información. Los estilos nacionales pasan a estar determinados por factores globales, incluso bajo los gobiernos de la nueva izquierda. Esta subordinación global acentúa las asimetrías económicas, reproduce términos comerciales desiguales, y llega a impedir cambios estructurales en los países sudamericanos. Estas son condiciones que vienen reproduciendo el papel de proveedores de materias primas desde hace décadas.

Las TAD tienen, por lo tanto, que ofrecer una respuesta a estas condiciones. No se acepta que la globalización convencional sea un proceso en su esencia positivo, con ello las transiciones se apartan de las posturas propias de la liberalización comercial convencional. Por el contrario, se sostiene que es necesario lograr autonomía frente a estas condicionantes.

Existen varias propuestas de ruptura con la globalización, como la “desconexión” de Samir Amin (1988) o la “desglobalización” de Walden Bello (2002). Aunque aquí no se las discute en profundidad por limitaciones de espacio, es oportuno indicar que en esos y otros casos existen algunos puntos de encuentro y también diferencias, sobre todo, porque, en ellas, se siguen manteniendo elementos típicos de la ideología del progreso. La apuesta por un orden global policéntrico tiene muchas potencialidades, pero puede terminar atrapada en otro tipo de extractivismo o desarrollismo convencional dentro de cada continente. Por lo tanto, es necesario ubicar las alternativas a la globalización como parte de una alternativa más allá del extractivismo, que permita romper con la clásica ideología del progreso económico.

La recuperación de la autonomía frente a la globalización no será concedida por los actores globales, sino que tendrá que ser conquistada desde el continente. Será una tarea difícil, aunque las actuales condiciones de crisis del capitalismo global abren nuevas oportunidades. Deberá, pues, ser una tarea coordinada y acompasada entre conjuntos de países para que puedan alcanzar un umbral que le permita fructificar.

Bajo las transiciones, se propone una desvinculación selectiva de aquellos procesos y relaciones más negativos para la región, en los que se originan y reproducen las asimetrías e imposiciones. Pero no se postula un aislamiento, ya sea de los países o del continente. La selectividad también se ejerce en mantener vínculos globales en aquellas áreas en las cuales la región considere que es útil o necesario. Algunos ejemplos son la circulación mundial de expresiones culturales, programas de asistencia en ciencia y tecnología, y distintos tipos de solidaridad internacional. La determinación de estas vinculaciones y desvinculaciones se hace a partir de estrategias alternativas al desarrollo, que no estarán enfocadas en réditos económicos o políticos, sino en su funcionalidad para la calidad de vida y la protección de la naturaleza. En cualquier caso, es indispensable recuperar la autonomía para llevar este plan adelante.

Autonomía, soberanía y supranacionalidad

Las TAD bajo el regionalismo autónomo requieren cambios importantes en la institucionalidad actual de los esquemas de integración. Se hace necesario lograr algún tipo de supranacionalidad y el establecimiento de políticas comunes regionales. Si bien esta posibilidad está contemplada en el marco de la Comunidad Andina, nunca fue efectivizada y, en el Mercosur, está excluida (es un acuerdo interguber-

amental). A pesar de que los gobiernos apelan a un discurso sudamericanista o bolivariano, e incluso se postula a la UNASUR como una “unión”, en realidad no se contempla la supranacionalidad, ni una coordinación estrecha en cuestiones económicas o productivas.

La supranacionalidad es resistida debido a que limita la soberanía nacional, ya que cada país debería acatar normas de un nivel superior. Si se examina la idea de soberanía, ligada a la capacidad de los Estado-nación de actuar a nivel internacional y contar con ciertas capacidades dentro de su frontera, se verá que en realidad es muy limitada (Krasner, 2001). Nuestros países mantienen una soberanía formal, pero son mucho más dependientes de los que usualmente se admite, incluso en el caso de Brasil. Esto hace que ese apego a la idea de soberanía clásica tenga un sustento limitado, y se vuelva una excusa repetida para evitar adentrarse más en la integración. A su vez, las nuevas condiciones ambientales, tanto sudamericanas como globales, exigen que otros componentes de las viejas acepciones sobre la soberanía deban ser redefinidos.

Las transiciones internacionales postulan un nuevo balance entre soberanía nacional y autonomía regional; en particular, se deben ceder porciones de soberanía en cada país para lograr mayores autonomías, tanto nacionales como por grupos de países. En otras palabras, es necesario ceder elementos de soberanía nacional para adquirir una autonomía regional que permita mantener una estrategia postextractivista viable.

La importancia de la autonomía ha sido abordada varias veces bajo distintos contextos, desde su conquista en regímenes coloniales a sus limitaciones bajo la globalización económica, y ha tenido un papel importante en los debates sobre la dependencia. Asimismo, desde los movimientos sociales, existen diversas reivindicaciones de la autonomía, a distintas escalas, en particular locales (por ejemplo, en prácticas de resistencia contra la globalización). No es posible revisar todas esas expresiones, pero es necesario que al menos se rescaten algunos antecedentes claves sobre el papel de la autonomía en la integración regional. En efecto, una teoría de la autonomía aparece en el argentino Juan C. Puig y en el brasileño Helio Jaguaribe (ver Di Masi, 2002). A manera de ejemplo, Puig entendía que la autonomía es la capacidad de la nación para optar, decidir y obrar por sí misma. Bajo las transiciones, es posible alcanzar autonomía a partir de acciones coordinadas y complementadas entre grupos de países. Se requiere, pues, de un nuevo regionalismo con las complementaciones y articulaciones descritas arriba para alcanzarlo.

Diversos componentes, como los acuerdos supranacionales, el manejo coordinado de recursos claves o de cuencas compartidas, y el establecimiento de cadenas productivas con eslabones en todos los países, se vuelven necesarios. Esta tarea es compleja y debe apuntar a aprovechar el discurso integracionista, pero para llevarlo a medidas concretas y coordinaciones más estrechas dentro de los bloques regionales.

En el plano global, también deberán promoverse cambios. A modo de ejemplo, en los asuntos comerciales, será necesario un papel más activo de los países sudamericanos en espacios como la UNCTAD; y, menor en otros, como la OMC.

Es apropiado presentar un ejemplo de opciones pasadas que pueden ser rescatadas y vigorizadas. A nivel internacional, en 1976, en la UNCTAD, se acordó crear organismos globales específicamente enfocados en materias primas, bajo la forma de un Programa Integrado para las commodities. Su objetivo era muy ambicioso: regular la producción, oferta, demanda y precios en los mercados globales. Se pusieron en marcha acuerdos relativos a distintos productos, como café, cocoa, caucho, entre otros. Sin embargo, su desempeño tuvo altibajos, hasta que, a fines de los años noventa, se abandonó la intención de regular los mercados. Actualmente, existe un conjunto de Organismos Internacionales en Bienes Primarios o International Commodity Bodies (ICB, por sus siglas en inglés), pero que solo cumplen funciones de información¹. Si hace unas décadas los gobiernos estaban dispuestos a regular el comercio mundial de materias primas, nada impide relanzar esa idea. De esta manera, se pueden rescatar algunas opciones dentro de la institucionalidad global, y paralelamente promover una reforma sustancial que permita regular de otro modo el comercio internacional en materias primas, y los flujos de capital asociados. En cambio, temas más recientes, como el cambio climático, imponen transformaciones todavía más radicales en la gobernanza mundial.

Un necesario cambio de rumbo

El presente documento ofrece un abordaje preliminar, con algunos ejemplos, de los contenidos posibles en la dimensión internacional de transiciones hacia las alternativas de desarrollo. Se parte de la premisa de que las transiciones hacia las alternativas al desarrollo tendrán mayor éxito de superar las actuales condiciona-

¹ Actualmente, existen organizaciones o consejos, por ejemplo, sobre cacao, café, algodón, azúcar, granos y maderas tropicales; y grupos internacionales de estudio sobre caucho, plomo y zinc, níquel, y cobre, entre otros (UNCTAD, 2010).

lidades si son realizadas por conjuntos de países. Esto hace que esta dimensión internacional sea un componente indispensable para estas alternativas, incluso las postextractivistas.

Los aspectos internacionales deben atender varios frentes, desde la coordinación y articulación de medidas nacionales con otras análogas en los países vecinos, un marco conceptual alternativo sobre el regionalismo, y una desvinculación frente a la globalización. Los distintos componentes propuestos permiten orientar las diferentes medidas transicionales hacia las metas de erradicación de la pobreza, calidad de vida y protección de la naturaleza. Por lo tanto, el proceso de integración transicional debería transitar por una reducción de las asimetrías entre los países sudamericanos, y una convergencia hacia un continente sin pobreza que asegure, además, los derechos de la naturaleza.

Bajo esta propuesta, el volumen del comercio exterior en recursos naturales se reduciría drásticamente. En cuanto a su composición, la proporción de recursos naturales que, en la actualidad, alcanza aproximadamente el 85% en la región andina, debería reducirse a menos del 50% en las primeras etapas. Simultáneamente, la proporción de comercio intrabloque que, en el caso de los países andinos, no supera el 10%, debería elevarse a más del 50%.

A partir de los diferentes componentes examinados en las secciones anteriores, se pueden derivar medidas concretas. Algunas de estas se presentan en la Tabla 2. Como puede verse, las críticas de la falta de alternativas concretas en los reclamos postextractivistas carecen de fundamento. En realidad, ya se ha acumulado un importante número de acciones posibles, y muchas de ellas pueden ponerse en marcha inmediatamente.

Finalmente, la necesaria reformulación de la integración sudamericana no es un lujo para un futuro lejano, sino que debe ser asumida sin perder más tiempo. El estilo de desarrollo actual, en especial aquel dominado por un extractivismo depredador, se vuelve insostenible en sus dimensiones sociales, ambientales y económicas. A su vez, la volatilidad y fragilidad de la globalización exige que los países de América del Sur comiencen a explorar estrategias de autosuficiencia y autonomía a escala continental. El continente posee todos los recursos y las capacidades para empezar a labrar su propio camino.

Bibliografía

América Económica (2011). Ranking 2010 [en línea]. Disponible en: <http://rankings.americaeconomia.com/2011/500/>

Alayza, A. y Gudynas, E. (Eds.). (2011). Transiciones. post extractivismo y alternativas al extractivismo en Perú. Lima: CEPES/RedGE/CLAES.

Altmann, J. y Rojas Aravena, F. (Eds.). (2008). Las paradojas de la integración en América Latina y el Caribe. Madrid: Fundación Carolina/Siglo XXI.

Amin, S. (1988). La desconexión. Buenos Aires: Iepala/Pensamiento Nacional.

Bello, W. (2002). Desglobalização. Idéias para uma economia mundial. Petrópolis: Vozes.

Caetano, G. (2009). Integración regional y estrategias de reinserción internacional en América del Sur. Nueva Sociedad, 219, 157-172.

CEPAL. (1994). El regionalismo abierto en América Latina y el Caribe. Santiago: CEPAL.

CEPAL. (2011). Base de datos. Anuario Estadístico [en línea]. Disponible en: http://websie.eclac.cl/anuario_estadistico/anuario_2011/esp/content_es.asp

CEPAL. (2012). La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe – 2011. Santiago de Chile: CEPAL.

Di Masi, J.R. (2002). “La contribución del Mercosur a un proyecto de integración regional en América Latina”. En V. López Villafañe y J.R. di Masi (coords.), Del TLC al Mercosur (pp. 259-297). México: Siglo XXI.

Erber, F.S. (2011). “As convenções de desenvolvimento no governo Lula: um ensaio de economia política”, Revista Economia Política 31 (1), 31-55.

FAO. (2011). The state of food insecurity in the world. Roma: FAO.

Ferrer, A. (2002). *Vivir con la nuestro. Nosotros y la globalización*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Gudynas, E. (2002). "El concepto de Regionalismo Autónomo y el desarrollo sustentable en el Cono Sur". En E. Gudynas (Ed.), *Sustentabilidad y regionalismo en el Cono Sur* (pp. 177-211). Montevideo: Coscoroba.

Gudynas, E. (2005). *El "regionalismo abierto" de la CEPAL: insuficiente y confuso*. Nuevo Mexico: Observatorio Hemisférico/International Relations Center.

Gudynas, E. (2008). *Una introducción a las IFRs: instituciones financieras regionales en América Latina*. Washington: Programa de las Américas/Center International Policy.

Gudynas, E. (2011). "Camino para las transiciones post-extractivistas". En A. Alayza y E. Gudynas (Eds.), *Transiciones. Post extractivismo y alternativas al extractivismo en Perú* (pp. 187-216). Lima: CEPES/RedGE/CLAES.

Gudynas, E. & Buonomo, M. (2007). *Integración y comercio. Diccionario latinoamericano de términos y conceptos*. Montevideo: Coscoroba.

Honty, G. (2011). *Cambio climático. Negociaciones y consecuencias para América Latina*. Montevideo: Coscoroba.

Katz, C. (2006). *El rediseño de América Latina. ALCA, Mercosur y ALBA*. Buenos Aires: Luxemburg.

Krasner, S.D. (2001). *Soberanía, hipocresía organizada*. Barcelona: Paidós.

Lissardy, G. (2009). *El banco brasileño que mueve América Latina* [en línea]. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/11/111109_brasil_bndes_influencia_america_latina.shtml

Malamud, A. (2004). *Regional integration in Latin América. Comparative theories and institutions Sociología (Portugal)*, 44, 133-154.

Malamud, A. (2009). La crisis de la integración se juega en casa. Nueva Sociedad, 219, 97-112.

Paéz, P. (2010). El SUCRE y la nueva arquitectura financiera regional. Caracas: SELA/Reunión regional Reforma de la Arquitectura Financiera Internacional y Cooperación monetaria y financiera en América Latina y el Caribe.

Pinheiro Guimarães, S. (2005). Cinco siglos de periferia. Buenos Aires: Prometeo.

Rosales, O. & Kuwayam, M. (2012). China y América Latina y el Caribe. Hacia una relación económica y comercial estratégica. CEPAL, Santiago de Chile. World Bank 2012. Uncertainties and vulnerabilities. Global Economic Prospects, Vol 4, World Bank, Washington.

UNCTAD. (2010). United nations cocoa conference [en línea]. Disponible en: <http://archive.unctad.org/Templates/WebFlyer.asp?intItemID=5391&lang=1>.